



Recomendación 1/2004, de 7 de julio, de la Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

Asunto: acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas.

ANTECEDENTES

La Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa aprobó el 4 de marzo de 2003 el informe 1/2003, relativo a la nueva regulación del impuesto sobre actividades económicas (en lo sucesivo, IAE) y a su repercusión en las empresas cuando deban acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. En aquel informe se proponían a los diferentes órganos de contratación los criterios a seguir a la vista de las modificaciones introducidas por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales.

En el mencionado informe se ponía de manifiesto también el nuevo régimen de exenciones de pago del IAE recogido en el artículo 83.1 de la Ley 39/1988 según la redacción dada por la Ley 51/2002. Veamos el redactado.

"La nueva regulación del artículo 83.1 de la Ley reguladora de las haciendas locales se orienta básicamente en el sentido siguiente:

- La letra "a" establece que están exentos del IAE, el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de análogo carácter a las comunidades autónomas y a las entidades locales.
- La letra "b" considera exentos del IAE los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros periodos impositivos.
- La letra "c" establece que permanecen exentos del IAE los sujetos pasivos personas físicas. Asimismo, también permanecen exentos los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, las sociedades civiles, las entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, general tributaria (que no tienen ninguna trascendencia para la contratación pública puesto que se trata de entidades sin personalidad jurídica), que tengan un importe limpio de cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros y a contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes que operen en el estado mediante establecimientos permanentes y con idéntica cifra de negocios.
- La letra "d" del referido artículo establece que las entidades gestoras de la Seguridad Social, las mutualidades de previsión social reguladas en la Ley 30/95, de 8 de noviembre, de ordenación y supervisión de los seguros privados, están exentas del impuesto.
- El mismo régimen recoge la letra "e" del referido artículo respecto a organismos públicos de investigación, establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados



íntegramente con fondos públicos, o establecimientos de enseñanza en todos sus grados que estén en régimen de concierto educativo y no tengan ánimo de lucro.

- La letra "f", declara exentas del impuesto, las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por aquellas actividades de carácter pedagógico, científico asistencial y de ocupación que realicen.
- La Cruz Roja española es la entidad que figura exenta en la letra "g".
- Finalmente, el apartado "h", declara asimismo exentos del impuesto a los sujetos pasivos que les sea de aplicación la exención del impuesto en virtud de tratados o convenios internacionales."

El informe 1/2003 establecía unas recomendaciones de actuación para adecuar el mandato de los artículos 13.1.a y 15.1 del Reglamento general de la Ley de contratos de las administraciones públicas, aprobado por Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en lo sucesivo, RGLCAP), a la nueva regulación jurídica del IAE. Dado que esta regulación jurídica ha estado nuevamente modificada, es necesario revisar las recomendaciones contenidas en el mencionado informe.

De acuerdo con lo que establecen los artículos 5 y 11.4 del Decreto 376/1996, de 2 de diciembre, de reestructuración de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, esta Junta formula las siguientes:

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

El Real decreto 1041/2003, de 1 de agosto (BOE núm. 213, de 5 de septiembre), por el cual se regulan determinados censos tributarios y se modifican otras normas relacionadas con la gestión del IAE (BOE núm. 213, de 5 de septiembre), modifica el Real decreto 243/1995, de 17 de febrero, y ahora establece que las empresas exentas del IAE no tienen que darse de alta en este impuesto, sino que se deben inscribir exclusivamente en un censo tributario (artículo 2 del Real decreto 243/1995, en la nueva redacción dada por el Real decreto 1041/2003). También establece que las empresas que ahora se encuentren en situación de exención de pago y, hasta el momento, se encontraran de alta en la matrícula del IAE tienen que presentar una declaración de baja (artículo 7.4 del Real decreto 1041/2003).

Por lo tanto, la matrícula del IAE está constituida exclusivamente por los sujetos pasivos que ejercen actividades económicas y que no están exentos del impuesto (art. 2 del Real decreto 1041/2003).

La nueva regulación de la gestión del IAE, con un número muy importante de empresas que ya no se darán de alta en este impuesto, deja el requerimiento del artículo 13.1.a) del RGLCAP sin justificación ni eficacia.

Efectivamente, el precepto reglamentario al que se ha hecho referencia, que se titula "obligaciones tributarias", quiere garantizar que la persona adjudicataria de un contrato administrativo demuestre que no tiene deudas ni con la Administración del Estado ni con la



Administración contratante. Uno de los tributos especificados es el IAE, y es en este sentido que el RGLCAP establece que la empresa propuesta adjudicataria debe aportar el documento de alta del IAE o el último recibo de pago completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.

Es cierto que el RGLCAP ya prevé (artículo 15.1.final) que si la empresa no está obligada a presentar estos documentos es suficiente una declaración responsable. Pero, es indudable que la modificación tan radical que ha sufrido la gestión del IAE obliga a reconsiderar las regulaciones concretas de los artículos 13.1.a y 15.1 del RGLCAP.

Insistimos, tal y como ya se puso de manifiesto en el Informe 1/2003 de esta Junta Consultiva, que el nuevo marco jurídico de regulación del IAE pide una reforma reglamentaria de los artículos 13.1.a y 15.1 del RGLCAP. Dado que se trata de una modificación que ya afecta normas de carácter básico (disposición transitoria primera del RGLCAP) es necesario que el Gobierno del Estado tenga la iniciativa.

Esta reforma reglamentaria, atendiendo la gran cantidad de exenciones legales del impuesto y el gran número de empresas que ya no se dan de alta del IAE, podría ir orientada a excluir el cumplimiento de las obligaciones del IAE como requisito previo a la adjudicación de los contratos administrativos, o bien a mantener el criterio general de acreditación del pago de este impuesto en el caso de las empresas que sean sujetos pasivos; y para las empresas exentas del pago, se podría requerir la presentación de la declaración censal de obligados tributarios y exigir que la actividad declarada en el censo coincida con el objeto de la licitación.

En todo caso, si bien la reforma reglamentaria parece imprescindible, en esta recomendación se quieren poner de manifiesto las nuevas regulaciones en materia de gestión del IAE y orientar la actuación de los órganos de contratación.

Es en este sentido que, consideramos que se pueden diferenciar los supuestos siguientes:

- Si la empresa propuesta como adjudicataria es sujeto pasivo del IAE y está obligada a pagar este impuesto, tiene que presentar el documento de alta del IAE relativo al ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato o el último recibo del IAE, acompañado de la declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.
- Si la empresa propuesta se encuentra en alguno de los supuestos de exención recogidos en el apartado 1 de l'artículo 83 de la Ley reguladora de las haciendas locales, aportará una declaración responsable en este sentido que especifique el supuesto legal de exención.

Asimismo, será necesario que aporte la declaración en el caso de obligados tributarios, teniendo en cuenta que el artículo 15.3 del Real decreto 1041/2003, de 1 de agosto, establece que la presentación de las declaraciones censales reguladas en este reglamento sustituye la presentación de las declaraciones específicas del IAE, y



que esta precisión se confirma en el artículo 4 de la Orden HACHE/2567/2003, de 10 de septiembre de 2003, por la cual se aprueba el modelo 036 de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de obligados tributarios y se establecen el ámbito y las condiciones generales para su presentación.

Por lo tanto, en el ejercicio de las competencias que establecen los artículos 5 y 11.4 del Decreto 376/1996, de 2 de diciembre, de reestructuración de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, para formular a todos los efectos las recomendaciones pertinentes, la Comisión Permanente de la Junta aprueba la siguiente

RECOMENDACIÓN

Se recomienda que todos los órganos de contratación de la Generalidad de Cataluña incluyan en los pliegos de cláusulas administrativas el texto siguiente:

"Obligaciones tributarias

- **Con la finalidad de que la empresa acredite que se encuentra al corriente de pago del impuesto sobre actividades económicas, es necesario que aporte la documentación siguiente:**
 - **Si la empresa propuesta como adjudicataria es sujeto pasivo del impuesto sobre actividades económicas y está obligada a pagar este impuesto, tiene que presentar el documento de alta del impuesto relativo al ejercicio corriente en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato o el último recibo del impuesto, acompañado de una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del impuesto.**
 - **Si la empresa propuesta se encuentra en algún supuesto de exención recogido en el apartado 1 del artículo 83 de la Ley reguladora de las haciendas locales, aportará una declaración responsable especificando el supuesto legal de exención y el documento de declaración en el censo de obligados tributarios."**

Barcelona, 7 de julio de 2004